

Opinión

¡España, tenemos un problema!

Jesús Rivasés

Jack Swigert (1931-1982), astronauta de la misión Apolo XIII, se hizo muy famoso por una frase, convertida en un «clásico», que nunca pronunció: «¡Houston, tenemos un problema!». El tripulante de aquella cápsula lo que realmen-

te dijo un 13 de abril de 1970, tras comprobar que habían saltado algunas alarmas, fue «Houston, hemos tenido un problema». No importa, desde entonces, «¡Houston, tenemos un problema!», se ha convertido en sinónimo universal para describir una situación complicada, muy complicada que, en el caso del Apolo XIII, no sin dificultades, terminó bien.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de certificar que la economía española crecerá este año algo más de lo previsto y menos el siguiente, pero sobre todo advirtió de que si no se toman medidas el déficit público se enquistará en el 4%, más o menos, ¡hasta el año 2028!, que también

es hasta donde alcanzan las previsiones del organismo. El martes, Carlos Ocaña y Raymond Torres, director general y director de coyuntura de Funcas, explicaron que la economía española recuperará, al fin, este año, la situación que tenía antes de la pandemia. Ocaña fue secretario de Estado en tiempos de Zapatero y suele ser prudente en sus análisis. Torres, que también procura ser ecléctico, pero es de los que ve más la botella medio llena, insistió sin embargo en que «la persistencia de un déficit público superior al 4% es una de las mayores amenazas para la economía española, en un contexto de retirada del apoyo del BCE en materia de tipos y de compra de deuda pública». Es

decir, ¡tenemos un problema!, palabra que también utilizó. El Gobierno tiene que enviar a Bruselas antes del 30 de abril la actualización del Programa de Estabilidad para los próximos años que, en teoría, debería incluir una senda de ajuste fiscal –menos déficit– para reducir la deuda pública en los próximos tres años. No hay indicios de que tenga ningún plan en ese sentido más allá de confiar en el crecimiento, algo que con aumentos del PIB del 1,5% no es suficiente. El peligro es que si vuelve la inestabilidad financiera será complicado financiar los 256.000 millones de deuda bruta nueva prevista para este año. ¡España, tenemos un problema!», dijera lo que dijera Swigert.

La sequía pone en jaque la esperada bajada de los alimentos

►El Gobierno reconoce que la falta de lluvias puede limitar la oferta de algunos productos

R. L. Vargas. MADRID

Tras superar una pandemia que produjo graves problemas en la cadena de suministros y ahora que parecía que empezaba lentamente a sobreponerse a los efectos que la guerra de Ucrania había tenido sobre los precios de los insumos como la energía, las materias primas o los fertilizantes; la cadena agroalimentaria española se enfrenta ahora a un nuevo «cisne negro» que pone en duda la tendencia a la baja en los precios de los alimentos que, según el Gobierno, se estaba empezando a entrever: la sequía. Aunque desde el Ministerio de Agricultura y la propia cadena agroalimentaria se insiste en que se empieza a apreciar una reducción de costes que, en su opinión, se habría de empezar a trasladar más pronto que tarde a los precios que se pagan en el supermercado, la sequía puede dar al traste con estos planes.

Lo que hemos vivido hasta ahora ha sido «una inflación de costes de producción», según explicó ayer el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, durante la presentación del informe anual de la Federación de Industrias de Alimentación y



Hace más de 100 días que no llueve con intensidad en España y las cosechas sufren sus efectos

Bebidas (FIAB). Y viendo la tendencia positiva que desde mediados del año pasado han tenido los precios de la energía, las materias primas, los fertilizantes... «eso nos llevaba a pensar que se iba a trasladar progresivamente a los precios», prosiguió. Pero ahora ha llegado la sequía y lo que pueda ocurrir ya no está tan claro. «En la medida que [la sequía] impida una cosecha normalizada, eso nos llevará a que la oferta en determinados productos sea más escasa e impacte en el precio», admitió. No obstante, Miranda cree que habrá que ver qué ocurre producto por

producto. En algunos, como explicó, España es importadora, como ocurre con los cereales o las oleaginosas; y si no hay sequías en otros países, las producciones y los precios deberían ser normales.

Miranda cree que a España la situación de sequía le puede afectar en productos propios como los cítricos, la fruta de hueso, el aceite... «Todo esto tiene un peso por sectores que habrá que sopesar. Estamos en un momento de gran incertidumbre en el que tenemos que evaluar el efecto de la sequía, que ya está teniendo su impacto en producción», si bien reiteró la

visión del Gobierno de que los precios deberían bajar en los próximos meses de forma progresiva, como también defendió el titular de la cartera, Luis Planas. «Mantengamos la visión de que los precios de la alimentación van a disminuir de forma progresiva en un periodo próximo. Hemos visto que esa contención se ha producido al principio de año y evidentemente esa es la perspectiva que tiene el Gobierno», afirmó Planas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de ayer.

Los productores de alimentos también tienen el convencimien-

Portugal lanza una cesta con 0% de IVA

►Portugal ha estrenado una reducción temporal del IVA en un paquete que comprende 46 alimentos básicos, una de las medidas impulsadas por el Gobierno del socialista António Costa para frenar la inflación.

La iniciativa, que estará en vigor inicialmente hasta octubre, puede impactar hasta en un 0,2% en la inflación anual, según cálculos del Ejecutivo, que confía en terminar 2023 con un 5,1%, arrastrado por la contención de los precios de la electricidad, en especial durante la segunda mitad del año. En la lista figuran, entre otros productos, pescados –como bacalao, dorada o sardina–, carne, pollo, leche, huevos, pan, arroz, aceite y frutas.

to de que si la sequía no llega a niveles extremos, los precios tienen que ir bajando de forma paulatina en un horizonte próximo. «El nivel de competitividad [de la cadena agroalimentaria] es tan alto que no me cabe duda de que se incorporará [la baja de precios de la materia prima]. Aunque siempre hay un decalaje porque las empresas tienen un «stock» que han comprado más caros. Cuando fluctúan los precios, igual que sucede al alza, sucede a la baja», aseguró el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.



Un hombre camina por el embalse de la Baells, en la provincia de Barcelona // REUTERS

LA FALTA DE AGUA IMPACTA EN EL CAMPO

-17,5%

Es la caída de las precipitaciones en el presente año hidrológico en comparación con el valor medio normal entre 1991 y 2020.

-50%

Es la caída que recogen a estas alturas del año hidrológico los valores de precipitación en algunas estaciones pluviométricas de Aemet, como las de Barcelona, Alicante o Murcia.

Bebidas. Para Miranda, el análisis hay que hacerlo «sector a sector», ya que la afectación «no es igual en todos, y habría que ver cómo afecta al peso de la cesta en su conjunto». No se atreven desde el Gobierno a vaticinar cuándo será visible la baja de precios en el supermercado: «Si la sequía no arroja situaciones extremas, podemos esperar que la moderación de costes se traslade a los precios. Estamos vigilantes y en contacto con la industria y la distribución», apuntaba Miranda.

La «asfixia del campo»

En las últimas semanas, las organizaciones agrarias han realizado informes sobre el impacto que la falta de precipitaciones está teniendo ya en el campo. Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la sequía «preocupante y generalizada» en el país está comprometiendo diversos tipos de cultivo, especialmente los de cereal.

COAG avanza que ya se dan «prácticamente por perdidas» las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que cultivos leñosos presentan problemas en la brotación.

'Planas se une a Ribera y tacha de «ilegal» el plan de regadíos en Doñana. Pág. 36

El Gobierno teme que la sequía dificulte la esperada moderación de los precios

► Comunidades autónomas, organizaciones agrarias y regantes se reúnen hoy

NEREA SAN ESTEBAN MADRID

El Gobierno teme que la acuciante sequía comience a impactar en la moderación de precios que se espera para los próximos meses. Comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias y comunidades de regantes se reunirán hoy con representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la llamada mesa de la sequía.

En el encuentro, apuntan fuentes de Agricultura consultadas por ABC, se hará un «análisis de situación» y se valorará la posibilidad de poner en marcha medidas como ya se hizo hace un año, en marzo de 2022, cuando el Gobierno aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, tras constatar que la reserva hídrica española estaba al 44,1% de su capacidad total, el nivel más bajo desde 1995.

Ahora, y en plena crisis de precios, la situación preocupa. No en vano, apuntan desde el equipo que dirige

Luis Planas, los cultivos más afectados por esta sequía están siendo sobre todo los cereales y el olivar, dos de los que más se han encarecido en los últimos meses como consecuencia de la inflación. De hecho, tanto los aceites como las pastas, el pan y la harina fueron incluidos en la rebaja del IVA que puso en marcha el Gobierno en enero, para tratar de frenar la subida de la cesta de la compra.

En un momento en el que tanto el campo como la industria comienza a notar un freno en el incremento de costes, que se espera se traslade en las pró-

ximas semanas a los supermercados, el foco está puesto en el impacto que puede tener la falta de lluvia en los cultivos.

«Marzo ha sido un mes malo desde el punto de vista de las precipitaciones, y abril ha venido a confirmar que estamos por debajo del año pasado. En la medida en que la ausencia de precipitaciones nos impida las cosechas puede haber una tendencia inflacionista», asumía ayer el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, en la presentación del informe anual de la Federación Española de Industrias de Alimentación y

INFORME ANUAL DE FIAB

Los alimentos y bebidas frenan su crecimiento por la inflación

N. SAN ESTEBAN MADRID

La inflación impactó el año pasado en el crecimiento de la industria de alimentación y bebidas, que registró un aumento del volumen de producción en 2022 de tan solo el 1,5%, hasta los 144.955 millones de euros.

Según se desprende de los datos presentados ayer por la patronal que representa a la mayoría de estas empresas, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas

(FIAB), la evolución ha sido muy inferior a la registrada en los ejercicios anteriores, con una media de crecimiento superior al 4%. «La inflación que estamos viviendo es una inflación de costes, que nadie quiere, y una parte ha sido absorbida por las empresas. A pesar de ello, seguimos creando empleo y creciendo en exportaciones», explicó el director general de FIAB, Mauricio de Quevedo. Las previsiones del sector sobre el impacto de estos

costes en los precios van en línea de las que hace el Gobierno: «Podemos intuir que si la sequía no afecta a la inflación, si todo se va tranquilizando, los precios irán bajando en un plazo muy razonable», apuntó De Quevedo, que insistió en que la cadena agroalimentaria «es la más competitiva».

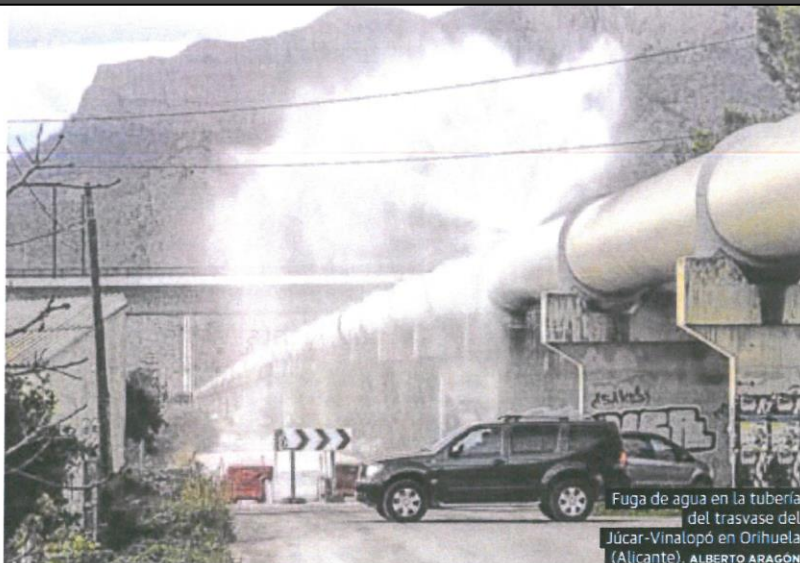
Con todo, el tejido empresarial del sector se mantuvo en 2022 en línea con 2021. A cierre del ejercicio, la industria de alimentación y bebidas estaba formada por 30.159 empresas, 101 empresas menos que el año anterior. Pese a esto, el informe muestra un crecimiento en el número de afiliados a la Seguridad Social del 3,2%, lo que se traduce en que el sector empleaba a 454.800 personas a cierre del año.

Al cauce de la riera de Canyet (Badalona) llega constantemente agua a dos litros por segundo. Tirando de calculadora son cerca de 180.000 litros al día durante 18 años, un caudal que no debería perderse y menos en tiempos de sequía. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cuantifica las pérdidas totales de agua en España en 651,8 hectómetros cúbicos anuales o lo que es lo mismo: 651.826 millones de litros durante 2020.

«No es un dato objetivo», señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). «No hay una auditoría que dé la cifra exacta de todos los pueblos de España», explica. El número anotado por la estadística nacional, no obstante, supone casi la misma cantidad que consume Andalucía en todo un año o la necesaria para rellenar unas 192.000 piscinas olímpicas. Aunque la herida 'sangra' menos con el paso de los años, las autoridades aún no saben dónde se encuentran esas fugas que permiten que se pierda el 15,4% del agua suministrada. «Ese porcentaje es mucho mayor», justifica Babiano.

Una afirmación que se ratifica con varias auditorías autonómicas. Una de ellas es del Gobierno baleare que certificó que las tuberías mallorquinas perdieron hace dos años 27 hectómetros cúbicos, un cuarto del abastecimiento total de toda la isla o cuatro veces la capacidad del embalse más grande de la región: el Gorg Blau (7,3 hectómetros cúbicos). En Cataluña, la agencia regional eleva sus números hasta los 134 hectómetros cúbicos de agua perdida, casi la totalidad del pantano de Sau, que abastece a Barcelona y ahora está en mínimos históricos.

En Galicia, se desveló que las fugas alcanzan el 41% de la distribución del agua en la región y «lo más llamativo es que en algunas pequeñas localidades se eleva hasta el 60%», advierte Ba-



Fuga de agua en la tubería del trasvase del Júcar-Vinalopó en Orihuela (Alicante). ALBERTO ARAGÓN

España pierde agua por un tubo

Sequía. El Instituto Nacional de Estadística cuantifica esta merma en unos 652 hectómetros cúbicos anuales o 192.000 piscinas olímpicas

JOSÉ A. GONZÁLEZ



biano. «Es necesario que las autoridades autonómicas recopilen estos datos», denuncia el gerente de Aeopas.

El guante lo ha recogido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que exigirá, a partir de 2025, a los municipios de más de 50.000 habitantes o suministradores de más de 10.000 metros cúbicos a presentar datos sobre sus pérdidas. Con esta información, España elaborará un diagnóstico general que presentará en 2026. Así pues, no será hasta ya bien entrado 2027 cuando el Gobier-

no tendrá una radiografía exacta de lo que ocurre con el agua que recorre los más de 450.000 kilómetros de tuberías de las redes de distribución en España.

Una distancia, equivalente a dar once vueltas al mundo y que para detectar una fuga «es necesaria precisión», asegura Alberto Gutiérrez, jefe del Área de Conservación del Sistema Valmayor-Majadahonda del Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid.

Precisamente, bajo el radar madrileño se encuentran 18.000 kilómetros de cañerías. Para acabar con esas fugas, la empresa

pública ha dividido su red en más de 700 sectores. «Tenemos registradas las salidas y entradas de cada sector y con un caudalímetro medimos lo que se llama caudal mínimo nocturno», detalla el portavoz del Canal de Isabel II. Una cifra que nace de la cantidad de agua que recorre cada sector por la noche. «En invierno suelen ser dos litros por segundo», señala Gutiérrez. «Si pasa, por ejemplo, a seis litros por segundo y se queda de forma permanente, salta la alerta y vamos a ver qué ocurre».

Además de ese ejército de me-

didores, el Canal de Isabel II cuenta con otro equipo de 'escuchantes', vitales para oír cualquier anomalía. «Despiertan como a las dos de la madrugada y tienen una serie de grabaciones cada cierto tiempo», detalla Gutiérrez. «Hay que tener el oído muy fino y hay gente que es capaz de diferenciar claramente cuándo se produce una fuga», apostilla.

Viglas de las fugas

El hilo 'musical' de las tuberías es una de las herramientas más usadas para vigilar las pérdidas reales en las cañerías españolas. «Pero no es del todo eficaz en las grandes canalizaciones», revela Agustín Ramírez, CEO de Aganova. Su solución, bautizada como Nautilus, es un aparato que se introduce en las cañerías y «recoge todos los sonidos que se producen en la construcción», explica el experto. «Es capaz de recorrer 35 kilómetros al día y tener una precisión de 0,5 metros. Así se detecta rápidamente la fuga».

Esta tecnología malagueña ha recorrido ya más de 2.000 kilómetros de tuberías «por todo el mundo» registrando sonidos y ahora son «capaces de ver qué ocurre por dentro», detalla Ramírez. Su última solución llamada Jábega consiste en introducir una pequeña cámara en las cañerías para detectar cualquier anomalía. «No podemos seguir perdiendo 14 millones de litros de agua», destaca el experto. «Falta inversión en infraestructuras», añade Babiano.

Según los cálculos de Seopan, que aglutina a las grandes firmas constructoras y concesionarias del país, casi la mitad de las tuberías de abastecimiento y alcantarillado supera los 30 y 40 años de antigüedad, respectivamente. «No hay planes para su renovación», denuncian. «La prioridad de solventar este problema es incuestionable. Es complicado pedirle a la población que ahorre agua cuando no sabemos la cantidad exacta que desaparece», denuncia Ramírez.

Más de 2.000 millones públicos para modernizar los regadíos

EDURNE MARTÍNEZ

MADRID. El Gobierno aprobó ayer un plan de inversiones que asciende a 2.130 millones de euros hasta 2027 para cubrir la modernización de los cultivos de regadío y ahorrar en consumo de agua dada la fuerte sequía que afecta a la agricultura. El ministro Luis

Planas lo confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde aseguró que el objetivo del Gobierno es conseguir como mínimo un ahorro del 10% en el consumo de agua de este tipo de cultivos.

Las comunidades que más millones recibirán serán Andalucía (casi 269 millones, 21% del to-

tal), Aragón (214 millones, el 17%) y Castilla y León (178 millones, el 14%). También es importante la cantidad destinada a los cultivos de Cataluña (9%), Comunidad Valenciana (7%) y Extremadura (7%). El ministro destacó la importancia de los regadíos y descartó las limitaciones a estos cultivos, ya que suponen el 23% del terreno cultivado pero ofrecen el 65% de la producción de vegetales en España, por lo que son «clave» para el futuro.

«Hay que tener regadíos sostenibles en España si queremos

continuar con el nivel de producción actual y mantener la autonomía alimentaria y el volumen de exportaciones de nuestro país», aseguró Planas. El plan apuesta por sistemas de regadío más eficientes que maximicen el ahorro de agua, reduzcan el consumo energético y optimicen el empleo de fertilizantes y fitosanitarios, indicó el ministro.

De los 2.130 millones anunciados, 1.255 millones se aportarán con cargo al fondo de recuperación y resiliencia y otros 875 millones a los Presupuestos Gene-

rales. Esta cantidad se suma a los 5.000 millones ya propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica para este fin y al Perte agroalimentario de 200 millones. «En total, más de 6.000 millones invertidos para cubrir las más de 750.000 hectáreas en una primera modernización», anunció Planas, que señaló que «hay que utilizar mejor cada gota de agua».

En la mesa de la sequía que se reúne hoy en Madrid se tratará la decisión de la Junta sobre Doñana, que calificó de «ilegal» e «irresponsable».

La crisis del cereal abre las costuras de la solidaridad con Kiev

PABLO R. SUANZES BRUSELAS
CORRESPONSAL

Ucrania es conocida como el *granero* de Europa. Antes de la invasión rusa producía cereales suficientes para alimentar a casi 500 millones de personas cada año. La guerra cerró puertos y fronteras, amenazando las cosechas, la economía del país y provocando hambrunas en África. La UE, junto a Naciones Unidas, logró establecer *corredores solidarios* para sacar grano del país, eliminando controles, inspecciones y aranceles. Y preparando una campaña logística sin precedentes para llevar a puertos continentales el producto. El problema es que el cereal ha *inundado* a sus vecinos, tirando los precios y movilizándolo a los agricultores del Este. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria o Rumanía han anunciado medidas restrictivas e incluso la prohibición total de entrada de cereales.

¿Qué ha pasado con los cereales ucranianos?

Polonia, Hungría y Eslovaquia han decidido en los últimos días cerrar sus fronteras al grano ucraniano. Argumentan que hay razones sanitarias, de preocupación pública y de exceso de oferta, lo que pone en peligro no sólo la salud sino el trabajo de sus ciudadanos. La realidad es que este año hay elecciones en Polonia y Eslovaquia, y el voto rural es fundamental. Bulgaria tiene un Gobierno interino y la presión política en Rumanía está disparada, con el ministro de Agricultura a punto de perder su puesto. Los trabajadores del campo están muy movilizados y exigen que se corte la llegada de cereales ucranianos, que en teoría debería estar de paso hacia destinos como Pakistán, India o Egipto, pero que en muchos casos se ha quedado en Europa, tirando los precios del producto local.

¿Qué han hecho entonces?

Polonia y Hungría anunciaron el fin de semana que no permitirán más cereales. Aunque ayer Varsovia anunció el establecimiento de un mecanismo para la reanudación «del tránsito a través de Polonia» de grano ucraniano sin que «ni una tonelada permanezca en el país». Bulgaria, por su parte, que ya ha recibido decenas de millones de euros como compensación, aduce razones de salud pública para restricciones *ad hoc*. Eslovaquia, que también asegura haber detectado el uso de fertilizantes no

aprobados por la UE en la producción de cereales que pasan por su territorio, decidió seguir los pasos polacos. Las suyas eran medidas más quirúrgicas, pero tras ver cómo sus vecinos más grandes cerraban la puerta, y ante el temor a que los envíos entonces se dirigieran a su país, optó por hacer lo mismo. Después actuó Bulgaria, produciendo un efecto en cascada.

¿Estamos ante un problema legal, político o sanitario?

Las tres cosas. La Comisión Europea ha reaccionado esta semana denunciando la decisión de esos gobiernos, recordando que las competencias en materia de comercio están transferidas a Bruselas y advirtiendo, sin micrófonos, de que esa vía es inaceptable, insolidaria y podría acabar en los tribunales.

¿Qué puede hacer la UE?

De momento, levantar la voz y pedir explicaciones. Pero sin buscar el choque, porque el último año ha sido especialmente complicado para los países fronterizos. Las competencias de Comercio están transferidas a la Comisión Europea, pero simplemente alegando cuestiones sanitarias estarían autorizados controles y bloqueos temporales.

¿Cuál es el escenario más probable?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, domina el arte de la persuasión pública, pero no puede tensar la cuerda. Polonia o Eslovaquia son dos de sus valedores más fieles, en materia militar, económica y política. Y sus preocupaciones son legítimas. El grano ha saturado sus mercados, tirado los precios, irritado a un 'lobby' fundamental de cara a las urnas y creado

P&R

problemas logísticos y cuellos de botella, lo que a su vez afecta a otras exportaciones. Rusia, siempre encantada de aprovechar las divisiones, mete presión interrumpiendo las inspecciones de navíos, lo que provoca en la práctica el cierre de los corredores autorizados. Bruselas está preparando nuevos paquetes de ayuda, decenas de millones de euros. Y tiene que tomar una decisión de cara a los aranceles. Ucrania no forma parte de la UE, y por lo tanto sus productos deberían pagar ciertos peajes en frontera.

¿Es una señal de cara a una posible adhesión de Kiev?

Esta fricción comercial muestra precisamente las costuras. Si Ucrania entrara en la UE, su papel de *granero continental* llegaría a otra dimensión.

El Gobierno admite que la sequía puede conllevar nuevas subidas de los alimentos

EDURNE MARTÍNEZ

MADRID. La moderación de los precios de las materias primas en origen hacía ver la luz al final del túnel, pero los alimentos podrían volver a incrementar su coste a consecuencia de la sequía que afecta a España. «Es un momento de mucha incertidumbre, tenemos que valorar el impacto de la sequía que está empezando a dejar sus efectos en la producción», reconoció ayer el secretario general de Agricultura y Alimentación del Gobierno, Fernando Miranda, en la presen-

tación del Informe Económico de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Ya van trece meses consecutivos de reducción de los costes de producción, según los índices de la FAO, lo que lleva a pensar en un «traslado progresivo a la cadena alimentaria y a los índices de precios al consumo», dijo Miranda. Sin embargo, advirtió que esto podría truncarse si la sequía sigue este ritmo, con un nivel de lluvias en abril inferior incluso al del año pasado, que ya fue malo.

Unos precios que por ahora no

tienen visos de reducirse y que por el momento solo se «contienen». Así lo reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, que indicó que en febrero los alimentos subieron un 16,6% mientras que en marzo el 16,5%. «Estamos en un momento de contención de los precios a pesar del contexto tan complicado por la guerra de Ucrania y la sequía», señaló el ministro, quien volvió a apuntar que los alimentos bajarán de precio de forma progresiva «en un periodo próximo», pero sin concretar más.

En este contexto, la elevada inflación limita el crecimiento de la industria española de alimentación, que tras varios años avanzando a muy buen ritmo en 2022 vio cómo el volumen de consumo se retrajo un 1,1%.

Javier Meléndez, Premio CEOE Castilla y León 2022

La patronal entregará el reconocimiento al titular de Patatas Meléndez en la gala 'La Noche de las Empresas' el 4 de mayo

VALLADOLID

El Premio CEOE Castilla y León 2022 ha recaído en Javier Meléndez, «un empresario con gran conocimiento del sector, fruto de la actividad desarrollada por su familia durante más de 40 años». La Confederación Vallesolana de Empresarios, CEOE Valladolid, celebrará el jueves 4 de mayo desde las 19,30 horas en la Cúpula del Milenio de Valladolid la Gala Empresarial *La Noche de las Empresas*, acto de reconocimiento al esfuerzo que realizan las empresas para mantener y crear empleo, generar prosperidad, contribuir al desarrollo de Valladolid y favorecer la atracción de inversiones para construir un Valladolid más próspero.

Fundada en 1999, Patatas Meléndez consiguió desarrollar su actividad convirtiéndose en líder en el sector y llegó a facturar 10 millones de euros el pasado año 2022, informan desde la patronal en un comunicado recogido por Ical. Recientemente, inauguró una nueva planta automatizada de 21.000 metros cuadrados, en la que ha invertido más de 36 millones de euros. De este modo, cuenta con la fábrica más grande y tecnológicamente avanzada en su sector, da empleo a más de 500 trabajadores y con-



Javier Meléndez. ICAL

trata a medio millar de cultivadores, hasta alcanzar una superficie de 4.000 hectáreas de cultivo de patata.

En la actividad que desarrolla comercializa 220.000 toneladas de patata al año. Para alcanzar esta cifra, la pasada campaña se sembraron alrededor de 16.400 hectáreas en la región, siendo la mayor productora nacional y contando en la actualidad con el 20% de cuota de mercado en España, a lo que hay que sumar su actividad exportadora.

Javier Meléndez, entre otros reconocimientos, recibió la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo, que le

concedió la Asociación Europea de Economía y Competitividad en octubre de 2018. Su empresa está comprometida con la sostenibilidad en todos los aspectos relacionados con la huella hídrica y la huella de carbono, así como con el cumplimiento de los ODS.

En cuanto al resto de los galardones, el premio a la Empresa Agropecuaria recaerá en Santiago Domínguez, agricultor y propietario de la Bodega Pandora en la DO Rueda. Extrusiones Metálicas Europea, recibirá el premio a la Empresa Industrial. El Premio a la Empresa de Servicios recaerá en el grupo hostelería Bla, Bla Bla, creado en 2016 por tres jóvenes empresarios. El premio a la Innovación Tecnológica irá a parar a Industrias José Luis Blanco, y el de Gestión Sostenible lo ha ganado la empresa Socamex.

El galardón dedicado al Compromiso Social lo recogerán los responsables de *Rainbowwear*, el dedicado al Compromiso con el Territorio recaerá en Tiedra de Lavanda, que gestiona Ecolavanda, de Tiedra, el de Cultura, Turismo y Patrimonio irá a Francisco Heras, empresario de salas de cine de Valladolid, y el premio al Reconocimiento Institucional recaerá en el Ayuntamiento de Málaga por su transformación en los últimos 20 años.

UCCL denuncia que la industria ofrece un 10% menos por la leche

La Opa advierte que si el precio baja será insostenible mantener las explotaciones

S. G. DEL CAMPO VALLADOLID
Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denunció ayer que industria y distribución están ofreciendo contratos con un 10% menos de retribución a los ganaderos por la leche, y calificó de «insostenible» la situación del sector si bajan los precios que pagan al ganadero. La Opa puso de manifiesto que se está perpetuando una crisis estructural que en Castilla y León dibuja «un panorama desolador», en palabras de su coordinador autonómico, Jesús Manuel González Palacín.

«En los últimos 14 meses hemos perdido un 11% de explotaciones de vacuno de leche, un 7% de los ganaderos y un 4% de la producción», aseguró. Por ello solicitó a la Administración «medidas urgentes para no perder este sector». La comparecencia sirvió para presentar al nuevo responsable de vacuno de leche de la organización, David Alonso, que releva a la anterior titular, Adoración Martín, precisamente porque ella tuvo que cerrar su explotación el pasado año.

«Empezamos la campaña 21-22 con unos costes de producción desorbitados. Estuvimos dos años per-

diendo dinero y a finales de 2022 la situación era insostenible», relató Alonso. «Había que matar las vacas para pagar las facturas de la luz y los elevadísimos costes». Así, «se sacrificaron 70.000 animales en menos de dos años y cerraron mil explotaciones en España». Ahora «seguimos en costes de producción desorbitados. Han bajado los cereales pero hay otros costes al alza, como los laborales, las cotizaciones sociales, y los intereses, que se están disparando, ya que hacen falta créditos para comprar maquinaria».

Alonso pidió a las autoridades competentes que investiguen los precios de la leche en los lineales, y denunció que hay «una multinacional francesa que está recogiendo leche sin contrato desde el 31 de marzo, lo que está prohibido por ley, y no se está investigando». Demandó «controles» a la Administración, «también a la leche que viene de fuera». Por otro lado, lamentó que industria y distribución «han encontrado un nuevo aliado en el Gobierno de España, que no hace más que decir que hay que bajar el precio de los productos básicos, que son los productos agrícolas y ganaderos».

Los ganaderos toman Lugo para protestar por los bajos precios

Sandra Vázquez. ORENSE

Ganaderos han tomado este martes las calles de Lugo en protesta por «los bajos precios». Más de un millar de ganaderos de Terera Suprema con más de 200 tractores, acompañados de otras asociaciones y colectivos del sector agroganadero, han salido a la calle para protestar por «los precios bajos» y los elevados costes de producción. Con su manifestación también quisieron denunciar los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

Sobre las 11:30 horas, la marcha partió desde el Polígono de As Gándaras en dirección al centro de la ciudad. Muy visibles, con chalecos amarillos, los ganaderos portaban pancartas en las que, entre otras cosas, se podía leer «Un prezo xusto para a nosa carne», «Un precio justo para nuestra carne» y «Basta xa, nin prezos nin axudas».

Los ganaderos aseguran que están cobrando en torno a 5,60 euros por kilo, cuando dicen que producir les cuesta unos 7 euros. Una situación que ha provocado que «muchas explotaciones» se vean avocadas a «vender vacas», según recoge Europa Press. El presidente de la Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, ya ha avanzado que desde este mismo martes realizarán concentraciones diarias frente a la Subdelegación del Gobierno y frente a la Xunta «con carácter indefinido» y hasta que escuchen sus reivindicaciones y se les aporten soluciones. Además, según indica Europa Press, Rego ha celebrado que la respuesta por parte del sector «está siendo unánime».

Entre algunas de las asociaciones y colectivos que se han unido están los ganaderos de Agromuralla o la Plataforma de Produtores e Produtoras en Ecolóxico, que aseguran compartir los motivos de esta protesta y ven «necesaria la unidad del agro» ante el «atropello» que dicen vivir.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSPAGE

La bronca por Doñana llega a Bruselas

La Junta intenta frenar «las mentiras» que el PSOE traslada a las autoridades de la UE

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

La batalla por el agua en Doñana, que ha abierto un nuevo frente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, se ha trasladado esta semana a Bruselas, donde el Grupo Socialista Europeo ha emprendido una campaña contra el proyecto de ley que avala el Ejecutivo de Juanma Moreno, incluyendo información incorrecta sobre las intenciones de la administración autonómica, pues habla de la autorización de nuevas extracciones del agua del acuífero, una información que falsa.

La propuesta del Gobierno andaluz contempla la ampliación del suelo regable en la Corona Norte de Doñana, siempre que haya disponible aguas superficiales procedentes de trasvases. Es decir, el proyecto no promueve, a priori, nuevas extracciones de agua del acuífero que alimenta los humedales de Doñana, salvo que las autoridades competentes decidan otra cosa. Y esa autoridad competente es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno central.

El proyecto sí supone legalizar los cultivos que actualmente existen en la zona sin autorización y que utilizan agua procedente de pozos ilegales que agravan la situación de sobreexplotación del acuífero.

La Junta viene defendiendo que su propuesta, lejos de generar más



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ayer, tras el Consejo de Ministros. ALBERTO DI LOLLI

presión sobre el acuífero, contribuirá a aliviarla porque servirá para poner fin a todos esos pozos ilegales. Sin embargo, ha recibido el rechazo unánime de los científicos y los conservacionistas que trabajan en Doñana, porque supone aumentar las necesidades hídricas de los regantes en el futuro, pese a que los re-

ursos serán cada vez más escasos como consecuencia del aumento de los periodos de sequía vinculados al cambio climático.

El Grupo Socialista Europeo ha enviado una carta a la Comisión ignorando todos esos matices y afirmando que lo que pretende el Gobierno andaluz es sencillamente aumentar

las extracciones de agua del acuífero, lo que no se ajusta a la realidad de la propuesta. La Junta, por su parte, ha movido ficha y tiene ya cita en Bruselas el próximo 3 de mayo para intentar contrarrestar la desinformación. Además, el Grupo Popular Europeo también se ha dirigido al comisario de Medio Ambiente, Virgi-

nijus Sinkevicius, y al vicepresidente, Frans Timmermans, reclamándole una reunión para darles traslado directo del contenido del proyecto de ley, que, a su juicio, no pone en peligro la conservación de Doñana.

La guerra se libra en las últimas horas en las instituciones europeas, porque son las encargadas de vigilar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ya en 2021 condenó a España por no hacer los deberes que tenía impuestos para una correcta conservación de las reservas hídricas del Parque Nacional. El PP sostiene que su proyecto de ley (que apoya Vox) no incumple esa sentencia.

Por su lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó ayer de «ilegal» la proposición de ley porque, asegura, se arroga una competencia que no es autonómica y porque es «irreal».

42,4%

Pantanos. Es el nivel de las reservas para el consumo en los embalses de España tras otra semana sin lluvias.

dato que «no se dispone de agua». Planas alertó sobre el daño reputacional que España puede sufrir por la aprobación de la propuesta andaluza, un daño que se suma al impacto que la sequía está teniendo ya en la economía andaluza. El ministro pidió al Gobierno andaluz que dé un paso atrás al respecto.

Planas se une a Teresa Ribera y tacha de «ilegal» el plan de regadíos en Doñana

► Socialistas y populares europeos protagonizan una 'guerra de cartas' con destino Bruselas

S. S./M. MOGUER
MADRID/SEVILLA

El Gobierno no va a dar respiro a la Junta de Andalucía con Doñana. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se posicionó ayer sobre la polémica regularización de regadíos en unas 800 hectáreas en el entorno del parque nacional, una propuesta que calificó de «claramente ilegal». El ministro cerró así la puerta a una posible división de posturas en el Ejecutivo en defensa de los agricultores, como sí ha ocurrido con otras medidas, como con el blindaje del lobo.

Esta vez Planas se unió a la titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y enfocó las críticas en la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Romero. La batalla política iniciada por el Ejecutivo se da ya a todos los niveles, tras involucrar también a la Comisión Europea y a los partidos socialista y popular europeo ayer.

«Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura, algo que tenemos que defender porque es nuestro pa-

trimonio», comparó Planas, que aseguró que el Gobierno hará «todo lo que sea necesario» para que la iniciativa que es «no se lleve a su fin».

La medida, según el responsable de Agricultura, es «ilegal», «irreal» —por que trata de distribuir un agua que «no existe en aquella zona»— y «claramente irresponsable», se explayó. Por ello, pidió a la Junta de Andalucía que retire la propuesta y refrendó el anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno de interponer recursos de inconstitucionalidad cuando se complete el trámite jurídico.

España exporta frutos rojos por un importe de más de 1.500 millones de euros de media, de los que una tercera parte corresponden al mercado alemán, que puede resultar «afectado por una iniciativa irresponsable por parte de los autores de esta proposición de ley», añadió el ministro, aludiendo a un posible daño reputacional del producto español.

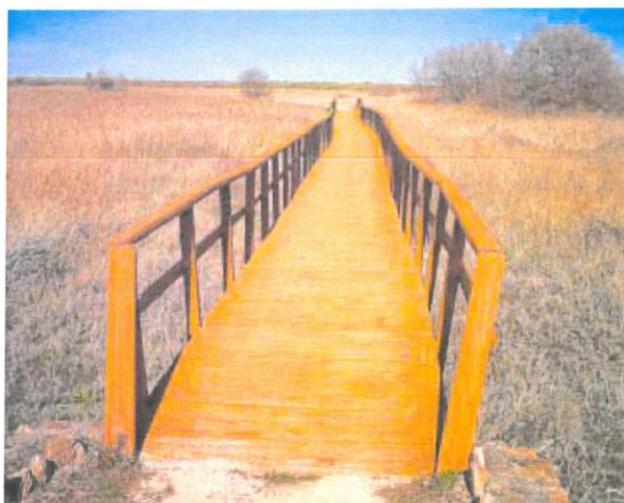
«Mi mayor preocupación como ministro de Agricultura son evidentemente la inmensa mayoría de productores, de agricultores que hacen un trabajo honesto; a los que conozco, con los que he trabajado y pienso continuar haciéndolo pero evidentemente esta medida que es absolutamente falta de sentido», aseguró.

Reunión urgente

La ofensiva en contra de la Junta se dio ayer también a nivel europeo, con Ribera reunida con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. Según la ministra, este expresó su preocupación por los posibles «riesgos adicionales» que la ley puede suponer para este espacio «emblemático tan particular y tan rico en Europa», informa EP.

A esta reunión se sumó una carta de los diputados del PSOE en el Parlamento Europeo dirigida a la Comisión, en la que aseguraron que la Junta quiere «permitir la extracción de más agua del parque de Doñana», según se quejaron dirigentes andaluces.

Como respuesta, el Partido Popular Europeo envió otra misiva a la Comisión para defender que la proposición de ley del Parlamento andaluz no daña el Parque, al no usar agua subterránea. La carta, firmada por el presidente del PPE, Manfred Weber, la portavoz del PP Dolors Montserrat y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, pedía también una reunión urgente con la Comisión para explicar los detalles de la propuesta y lamentaba el «daño importante» que se está causando a la imagen de Doñana, de Andalucía y de su agricultura.



Los matorrales han sustituido al agua en el humedal // GUILLERMO NAVARRO

El patronato de Las Tablas de Daimiel pide agua del Tajo para salvar el humedal

► Aunque menos del 10% de la superficie está encharcada, lo debe autorizar el Ministerio

J. A. PÉREZ

El patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel ha pedido de forma oficial un trasvase de agua de 17 hectómetros cúbicos procedentes del Tajo-Segura. Lo hace ante la sequía prolongada y la escasez de la superficie encharcada, que en estos momentos es de unas 150 hectáreas sobre las 1.700 que conforman el humedal, es decir, menos del 10%. Así pues, el patronato hace suyo el manifiesto firmado por más de 500 científicos, que proponen el trasvase como una solución a corto plazo, mientras se buscan otras alternativas hídricas para el ecosistema y los regadíos.

La petición del trasvase se ha trasladado a la Comisión Mixta de Gestión de Parques Nacionales, que se reúne el 27 de abril y será finalmente la que decida si lo solicita al Ministerio de Transición Ecológica. La ministra Teresa Ribera ya dijo hace un mes que el trasvase a Las Tablas de Daimiel debe ser «una solución absolutamente excepcional», aunque reconocía que la situación es «enormemente preocupante».

El presidente del patronato, Esteban Esquinas, declaró a Efe que se trata de una «emergencia», por lo que el

trasvase «está más que justificado». Por su parte, Félix Romero, director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, explicó que la posición defendida por la Junta es que se aplique el Plan Rector de Uso y Gestión del parque nacional, lo cual implica pedir un trasvase y, en caso de que no se autorice, bombear agua mediante pozos para garantizar la conservación de Las Tablas de Daimiel. El trasvase, añadió Romero, se realizaría a través de la tubería de la llanura manchega.

Los ecologistas, en contra

Sin embargo, los ecologistas, también presentes en el patronato, se muestran contrarios, ya que no creen que sea «la solución para el parque». «El único trasvase posible es el que proceda de devolver el agua que se extrae de los pozos ilegales de los alrededores, que están sobreexplotando el acuífero que alimenta Las Tablas de Daimiel. El ahorro de esa agua llegaría a Las Tablas a través del ascenso de los niveles del agua subterránea, que afloran en los Ojos del Guadiana», expone WWF. Y consideran que un trasvase «daría más alas al regadío y trasladaría la presión a la cuenca alta del Tajo».

Finalmente, el representante de los grupos ecologistas a nivel regional, Alberto Celis, aseguró que la propuesta del trasvase no figuraba en el orden del día del patronato y fue aprobada con algún reparo por parte del propio organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio.

PROMOTORA DE VIVIENDAS SANCHEZ PRIMO, S.A.
El administrador solidario de la mercantil Promotora de Viviendas Sánchez Primo, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 30 de mayo de 2023 en Madrid, calle Duque de Seso 11-13 1º G, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y en segunda el siguiente día hábil, es decir el 31 de mayo de 2023, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2022.
Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/23989/2022 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Quinto.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/21790/2022 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Sexto.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/01577/2022 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Séptimo.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/23683/2021 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Octavo.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/24510/2021 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Noveno.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/04900/2021 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Décimo.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/04910/2021 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Undécimo.- Información sobre estado del procedimiento recaudatorio tramitado con número de expediente 28/04910/2021 frente al Tribunal Económico-Administrativo, acuerdos a tomar, ratificación acuerdo interposición recurso contencioso-administrativo.
Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Madrid, 12 de abril de 2023.- El administrador solidario, Don Juan José Cano de Alarcón Gómez-Cano.



Presentación del proyecto gastronómico y solidario del Consejo Regulador de 'Cecina de León'. ICAI

Seis estrellas para la Cecina de León

EL CONSEJO REGULADOR COLABORA CON ESTRELLAS MICHELIN EN EL AUDITORIO MIGUEL DELIBES PARA ELABORAR UN MENÚ ALREDEDOR DE ESTE ALIMENTO

La Asociación de afectados de ELA en Castilla y León recibirá el dinero recaudado de los 80 comensales, que deberán abonar un precio de 120 euros por persona, y de aquellos que no puedan acudir a la cita y opten por donar a través del 'Menú 0'

J. CARRÓN VALLADOLID
Gastronomía y solidaridad se dan cita en Valladolid para ayudar a los afectados de ELA en la Comunidad. El próximo 8 de mayo, el Auditorio Miguel Delibes será el lugar donde Cecina de León IGP y la Asociación de afectados de ELA en Castilla y León aunarán fuerzas para recaudar fondos con este producto gastronómico como protagonista. Un total de 80 comensales podrán disfrutar de este selecto menú de 120 euros, destinados íntegramente a la asociación. Además, para la gente que quiera colaborar y no consiga acudir al evento, se habilitará un 'Menú 0' para donar la cantidad que deseen. La reserva de plazas se abrirá el lunes 24 de abril a través de la web www.cecinaledon.org.

El menú, que girará en torno a la cecina leonesa, estará a cargo de 6 chef Michelin. Cinco de ellos se encuentran en Valladolid: Miguel Ángel de la Cruz, de La Botica de Matapozuelos, Víctor Gutiérrez, de Taller Arzuaga, Alvar Hinojal, de Alquimia Laboratorio, Víctor Martín, de Trigo, y Marc Segarra, de Referitorio. A ellos se suma el leonés Juanjo Losada, del Restaurante Pablo.

El evento fue presentado ayer en el Auditorio Miguel Delibes de la mano de Raquel Factor, directora técnica del consejo regulador de la IGP Cecina de León, quien explicó

como el acto no nació con una intención solidaria. En esencia, se trata de la cuarta colaboración entre Cecina de León y cocineros con Estrella Michelin, tras su paso por León, San Sebastián y Santander. «Una vez fuimos construyendo el proyecto, la balanza se fue inclinando al evento solidario», comenta la directora técnica. «El lanzamiento del programa televisivo protagonizado por Unzué y la labor de visibilización de Urbano González en León nos hicieron cambiar el rumbo de este evento e incorporar esta meta solidaria», relata Raquel Factor.

Además de los cocineros, el acto contará con dos cortadores de Cecina de León, Diego Hernández y Raúl Barrado, y con la colaboración de vinos de implantación territorial en Valladolid: Denominación de Origen Toro, Ribera, Rueda, Cigales y León. Un menú que contará con «una de las mejores despensas del país» para «aportar un grano de arena» a los afectados de ELA en Castilla y León. Según un comunicado, esta cita estará presentada por el periodista Javier Pérez Andrés, y tendrá como objetivo disfrutar y promocionar la gastronomía al tiempo que se colabora con la Asociación de afectados de ELA en la Comunidad.

A la rueda de prensa también acudieron María Isabel Blanco Llamas,

consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Pablo Ibáñez, miembro de la Junta directiva de ELA Cyl, y Rafael Hernández de Diego, afectado de ELA. «Al final no deja de ser un evento solidario donde aumamos gastronomía, turismo y solidaridad. El objetivo es sensibilizar, visibilizar y recaudar fondos para seguir sumando en esta batalla», explica Ibáñez. Para ello, lo recaudado irá destinado de manera íntegra a la asociación y los costes correrán a cargo de Cecina de León IGP, la Junta de León y la Junta de Castilla y León. Por su parte, la consejera de Familia explicó como surgió la participación de la Junta. «Cuando nos preguntaron no dudé en decir que sí. Estamos a disposición para todo lo que necesiten y, por supuesto, estaremos el próximo 8 de mayo apoyando y dando nuestro cariño a la asociación».

La Junta se involucra de nuevo en la causa de ELA Cyl después de firmar hace unas semanas un acuerdo de colaboración que, entre otras medidas, destinará 400.000 euros a la asociación en dos años. Una asociación, en palabras de Pablo Ibáñez, que tiene un gasto anual de 230.000 y que destinarán lo recaudado a material ortoprotésico y terapia para los afectados. El próximo 24 de abril se abrirá el plazo de inscripción de este menú solidario.

Ecologismo para adultos

POR LUIS QUIROGA Y TONI TIMONER

«El cambio climático es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ecologistas. Urge replantear la estrategia medioambiental desde el pragmatismo, el realismo, la eficacia y la ambición, y donde la militancia y las quimeras den paso al análisis crítico y a la planificación razonada, y el activismo social al despliegue económico»

ESTE 29 de abril se cumplen 25 años de la ratificación por parte de España del Protocolo de Kioto. Ese acuerdo fue un hito crucial al reconocer y afrontar por primera vez a nivel internacional el cambio climático, claramente el desafío medioambiental más complejo al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Sin embargo, desde el punto de vista sus propósitos, el balance no ha sido del todo satisfactorio: las emisiones totales de CO₂, el principal gas de efecto invernadero, fueron en 2022 prácticamente las mismas que en 1998. Y aunque Kioto propició políticas que han reducido la intensidad de emisiones en la economía y por persona, eso no es suficiente. Queda por tanto muchísimo por hacer y tenemos apenas otros 25 años, el mismo periodo de tiempo transcurrido desde Kioto, para llegar al 2050 con cero emisiones netas.

Durante los últimos 25 años es indudable que el movimiento ecologista ha liderado la narrativa de acción climática, consiguiendo importantes logros. Pero empieza a ser evidente que el ecologismo tradicional no está equipado para pilotar la enormidad de la transición energética. En primer lugar, parte del activismo ecologista defiende posturas obstruccionistas e incoherentes con la lucha contra el cambio climático, como por ejemplo la resistencia a agilizar la tramitación de nuevos proyectos de energías renovables, la obsesión con el decrecentismo, o la dogmática aversión a la energía nuclear incluso como solución temporal. Por otra parte, en tanto que son una corriente social minoritaria e históricamente afín a la izquierda, no están capacitados para cimentar grandes consensos sociales y carriles amplios de acuerdo, como deja patente su apego por propuestas de limitado beneficio climático, pero de gran impacto negativo en la vida cotidiana de los ciudadanos corrientes.

Por ello, parafraseando a De Gaulle en su referencia a los políticos, el cambio climático es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ecologistas. Urge replantear la estrategia medioambiental desde el pragmatismo, el realismo, la eficacia y la ambición, y donde la militancia y las quimeras den paso al análisis crítico y a la planificación razonada, y el activismo social al despliegue económico.

Para comenzar, hay una urgente labor pedagógica para reparar el daño causado por un activismo climático que ha pecado de infantilismo con llamamientos a sacrificios cotidianos y estériles (véase el ciclismo militante) o existenciales y disparatados (p.ej. la renuncia a la descendencia). Son consignas que marean al personal de modo contraproducente, haciendo más por fomentar la desesperanza jeremiaca entre sus acólitos y el resentimiento entre los renuentes (que sospechan que no por reemplazar la hamburguesa por la quinoa la canícula será menos calurosa), que por hacer frente al calentamiento global.

En su lugar, hay que asumir, en primera instancia, que tenemos que adaptarnos a un aumento de la temperatura irreversible en las próximas décadas. Y a continuación hay que explicar con claridad a los ciudadanos dónde radica el problema de las emisiones



NIETO

(la producción de electricidad, la climatización de edificios, la industria y el transporte, a partes iguales muy aproximadamente) y presentar una planificación creíble y sensata para abordar su reducción plausible y evitar un aumento adicional de las temperaturas.

Esa planificación, que ciertamente competirá a los poderes públicos, debe dejar al ciudadano lo más tranquilo que se pueda, evitando prescribir y optando por incentivos inteligentes para la toma de sus decisiones, tanto en el mercado de bienes de consumo como en el de representación política: eligiendo gobernantes que ofrezcan planes creíbles de descarbonización y exigiéndoles que rindan cuentas.

Ninguna gestión efectiva es posible sin rendición de cuentas. Para que el coste de las políticas climáticas sea asumible es imprescindible analizarlas y compararlas en términos de coste-beneficio y horizontes temporales. No es lo mismo descarbonizar a un coste de 30 euros la tonelada de CO₂, que a 200, del mismo modo que el beneficio de esa acción es mayor en 2030 que en 2050. Por ello una 'contabilidad pública climática' es esencial, especialmente en los muchos casos en los que habrá que priorizar entre diferentes asignaciones de recursos públicos limitados y compensar como proceda (e.g., en el caso del gran melón por abrir en España: los recursos hídricos y la adaptación del sector agrícola a un clima diferente).

Todo ello tiene una complejidad técnica muy superior a la que las áreas de medio ambiente de las administraciones están habituadas, por lo que habrá

una inversión importante en aumentar y mejorar sus equipos técnicos para la transición energética. Pero con mayores atribuciones, la administración requerirá también estar más vigilada. Por ello será necesario un cuerpo que, desde la autonomía y la independencia, sea capaz de una revisión efectiva de las políticas climáticas, aportando consistencia y reduciendo el riesgo de oportunismo ideológico. Hablamos de establecer una agencia o autoridad climática independiente, semejante a lo que ya ocurre en el ámbito fiscal con la Airef, algo que ya opera en otros países de nuestro entorno.

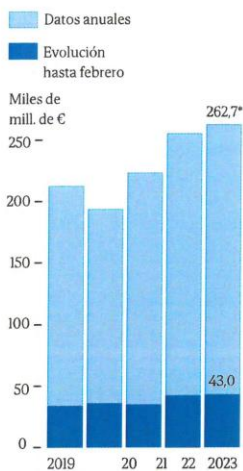
Así equipados, los nuevos gestores climáticos tendrán que crear las condiciones favorables para el éxito de la transición energética.

La primera es asegurar que la población acompañe el proyecto. Incluso con una gestión ordenada de los costes, el desafío es mayúsculo y se extiende a todos los sectores, empezando por el uso del territorio: el «renovables sí, pero no así» choca con la inmensidad del volumen de nuevas infraestructuras que serán necesarias. Y continuando por la política industrial: el reemplazo de tecnologías energéticas no puede ser una improvisación atropellada en aras de la 'emergencia climática' que destruya el tejido fabril nacional y que solo conseguiría crispación social. Tiene que ser coordinado con las empresas y principales empleadores del país. Así lo reconocen los EE.UU. o nuestros vecinos franceses, que hablan de la «soberanía industrial verde» en la que la transición energética avanza a la velocidad a la que las empresas autóctonas adaptan sus procesos, en lugar de recurrir a importaciones deslocalizadoras.

En segundo lugar, habrá que hacer todo lo posible para que el despliegue y avance tecnológico sea de amplio alcance. Con las tecnologías actuales es posible descarbonizar, a un coste generalmente asumible, aproximadamente la mitad de las actividades humanas. Por ejemplo, hoy contamos con soluciones viables, a un coste no sensiblemente superior al permitido por la tecnología anterior, para un 'mix' eléctrico bajo en combustibles fósiles, una amplia reutilización de residuos, la electrificación de la climatización o de parte del transporte, y una agricultura con menos impacto en emisiones. Pero la descarbonización de grandes sectores clave de nuestras sociedades, como la construcción, metalurgia, industria química y aviación, presentan grandes desafíos y requerirán nuevas soluciones. Es un gran reto, pero también una enorme oportunidad de creación de riqueza a una escala global que emprendedores en todo el mundo se aprestan a aprovechar. En esta competición, España está relativamente bien posicionada gracias a su excelencia educativa en disciplinas técnicas y un ecosistema de empresas líderes en ingeniería e infraestructuras. Tenemos por tanto el potencial de contribuir a que el mercado, con su enorme capacidad de creación, sea capaz de aportar las soluciones tecnológicas necesarias, creando al mismo tiempo nuevas fuentes de bienestar. Para ello será clave desde el sector público el crear un entorno lo más favorable posible a esta innovación verde, tanto desde un punto de vista de marco institucional como de atracción y desarrollo de capital financiero y humano.

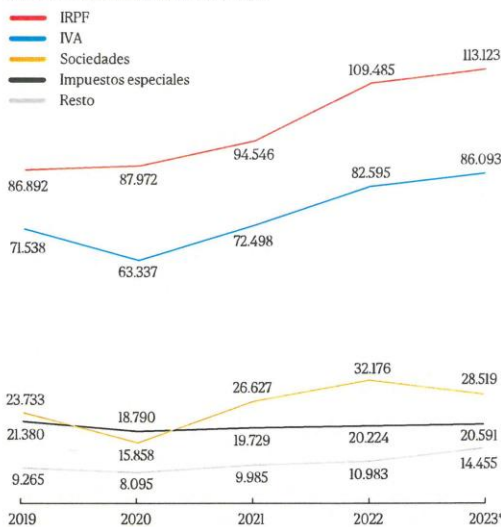
Luis Quiroga y Toni Timoner
son cofundadores de OIKOS, Política y Medio Ambiente

LA RECAUDACIÓN CRECE A RITMO RÉCORD

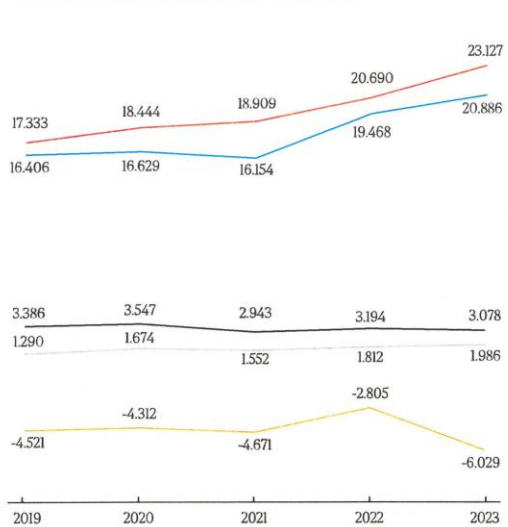


FUENTE: Agencia Tributaria *Previsión recogida en Presupuestos

DATOS ANUALES. En millones de euros



EVOLUCIÓN HASTA FEBRERO. En millones de euros



EL MUNDO

El IRPF sigue al alza y sin alivio

● El Gobierno mantiene su negativa a deflactar la tarifa y el tipo medio pulverizará este año otro récord ● La subida de pensiones y salarios por la inflación hace que se paguen más impuestos sin ganar poder de compra

DANIEL VIAÑA MADRID

El tipo medio efectivo del IRPF que este año soporten los contribuyentes será, casi con total seguridad, el más alto jamás registrado en España. Sólo una hecatombe económica o la decisión del Gobierno de adaptar el impuesto a la inflación podrían evitar este nuevo récord. La primera posibilidad, a tenor de todas las previsiones oficiales y de los diferentes servicios de estudios, parece descartada. Y la segunda, según el propio Ministerio de Hacienda, también.

Fuentes del departamento de María Jesús Montero confirman a este periódico que el Ejecutivo mantiene su negativa a deflactar la tarifa. Exponen que los ingresos por IRPF que superarán muy ampliamente los 100.000 millones de euros, son necesarios para financiar la reducción del IVA en la luz, el gas y en determinados alimentos. La más alta de la historia, subrayan en Hacienda.

Añaden, además, que la rebaja del impuesto de la renta para las más bajas también será muy importante. Según sus estimaciones, un contribuyente con un sueldo de 18.500 euros, que es el salario más repetido, obtendrá un beneficio fiscal de 600 euros. Muy superior, prosiguen, a los 35 euros que, para el mismo nivel de ingresos, afirman que reportará la rebaja del tramo autonómico que han aplicado Madrid o Andalucía.

Y sin duda, para esos salarios más bajos, la rebaja nacional es más potente porque su capacidad para hacerla es igualmente mayor. Pero además, la decisión del Gobierno de no adaptar la tarifa aboca al resto de tra-

bajadores a un doble castigo. A las rentas altas, pero también a las rentas medias, que además de sufrir una pérdida de poder adquisitivo deberán pagar más impuestos.

La teoría económica dice que el IRPF debe incrementarse de manera progresiva cuando se produce un incremento salarial que, efectivamente, reporta una ganancia de capacidad de compra. Pero cuando el aumento únicamente se produce para combatir la inflación obviamente no hay ganancia, y lo que se recomienda ampliamente es la deflactación. Además, los incrementos que este año han experimentado la inmensa mayoría de salarios no son, ni de le-

14%

En 2022, el tipo efectivo medio pagado por el IRPF en 2022 fue del 14,1%. Este año, la cifra será superior.

jos, de la misma intensidad de la inflación. Y ahí es cuando se produce el doble perjuicio: la obligación de pagar más impuestos sumada a una sensible pérdida de poder adquisitivo.

A ello hay que unir que también en 2023 es cuando se ha aplicado la notable subida del 8,5% para todas las pensiones y que, por lo tanto, será este año cuando eso se deje notar en la recaudación del IRPF y tire para arriba del tipo efectivo. El inspec-

tor de Hacienda y ex diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, publicó el pasado mes de febrero en Esade, y junto al economista Carlos Victoria, un documento que explica muy bien el efecto de este incremento.

«Tomando el ejemplo de un contribuyente que gane 26.000 euros, y que se le actualice la pensión al 8,5%, entonces pasará a ganar 28.210 euros, para mantener su poder adquisitivo y su capacidad económica. Sin

embargo, en este caso, antes pagaba una cuota líquida de 3.910,40 euros, soportando un tipo efectivo del 15,04%. Ahora pasaría a pagar 4.572,91 euros, soportando un tipo efectivo del 16,21%», plantea el informe.

«Si no hubiese habido progresividad en frío, esto es, si se hubiesen adaptado las tarifas del IRPF «el pensionista hubiese seguido pagando un 15,04%, ya que el incremento del 8,5% sólo compensa la inflación». «La

EL SUPERÁVIT ALIMENTARIO SE HUNDE

LA INFLACIÓN GOLPEA LA BALANZA. El escenario de inflación ha impactado de lleno en la industria alimentaria española, provocando la primera caída del superávit comercial en 15 años. En concreto, 2022 cerró con un saldo positivo de 10.640 millones de euros, un 20,1% menos que el año anterior.

MENOS EXPORTACIONES, MÁS CARAS. Según el último Informe Económico de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), el valor de las ventas al exterior experimentó un alza del 9%, hasta los 41.643 millones, pero el volumen exportado se redujo un 7,2%.

CAEN LAS EMPRESAS QUE VENDEN FUERA. En 2022, el número de empresas exportadoras del sector se contrajo un 2,3%, hasta las 18.902. Un retroceso que desde FIAB achacan a «la inseguridad general de la economía, el fuerte impacto de la inflación y todos los problemas logísticos y de transporte».

ESTADOS UNIDOS ADELANTA A CHINA. Por mercados, la UE sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con una cuota del 57,7%. El primer socio extracomunitario ha pasado a ser EEUU, que ha adelantado a China tras registrar el país asiático un desplome del 34,5%. / POR CRISTINA ALONSO

diferencia», concluye, es del «1,07% y supone 330 euros de más impuestos, es decir, un marginal del 30% de progresividad en frío».

En este contexto, el tipo efectivo medio no hará más que subir este año y marcará, como se ha apuntado, un nuevo máximo histórico. Ya lo hizo en 2021 y también en 2022, tal y como esta semana ha puesto de manifiesto el propio De la Torre. «El tipo efectivo del IRPF, que ya estaba en máximos en 2021, alcanzará un nuevo tipo récord en 2022: pasa del 13,5% al 14,1%. Los contribuyentes nunca habíamos pagado, de media, un tipo tan elevado de IRPF», expone en un documento. Pero los apuntados incrementos salariales y de pensiones pulverizarán esas cifras.

PLUSVALÍA

Por otra parte, la recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, cayó casi un 40% en 2022 por el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional y la posterior modificación de la Ley para su cálculo.

Según los datos publicados por Europa Press en base a la información de la Intervención General de la Administración del Estado, los ingresos obtenidos por los ayuntamientos a través de este tributo descendió de 2.141 millones en 2021 a 1.306 millones en 2022. Los ayuntamientos habrían dejado de ingresar así 835 millones de euros tras la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaraba la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo.